



***CRIMINOLOGÍA Y DERECHOS
FUNDAMENTALES: SU ESTUDIO MEDIANTE
CASOS PRÁCTICOS ELABORADOS A PARTIR
DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL***

**Emilia Girón Reguera
Profesora Titular de Derecho Constitucional
Universidad de Cádiz**

ÍNDICE

Presentación.....	3
Caso n.º 1. El derecho a la libertad personal y a la seguridad: el habeas corpus.....	4
Caso n.º 2. El derecho a la libertad personal: la detención preventiva.....	6
Caso n.º 3. El derecho a la libertad personal: la prisión provisional.....	8
Caso n.º 4. La prisión provisional y la extradición.....	10
Caso n.º 5. El derecho a la no autoincriminación y presunción de inocencia.....	12
Caso n.º 6. El derecho fundamental a la presunción de inocencia.....	14
Caso n.º 7. Presunción de inocencia y prueba indiciaria.....	17
Caso n.º 8. El derecho a la tutela judicial efectiva.....	19
Caso n.º 9. Prohibición de tortura, tratos inhumanos y degradantes.....	21
Caso n.º 10. El secreto del sumario como límite del derecho de información.....	23
Caso n.º 11. Reserva de ley y reglamento: principio de legalidad sancionadora.....	25
Caso n.º 12. Principio non bis in idem.....	27
Caso n.º 13. El derecho fundamental de reunión.....	29
Caso n.º 14. Los derechos del trabajador a la intimidad y al secreto de las comunicaciones versus poder de dirección empresarial.....	31
Caso n.º 15. Colisión de derechos.....	33

Presentación

El presente trabajo recopila casos prácticos que se han trabajado en la asignatura de Derecho Constitucional en el Grado en Criminología y Seguridad con el objeto de sustituir la docencia teórica de materias de especial importancia en esta titulación por una enseñanza práctica. El estudio mediante casos facilita el aprendizaje de esta materia jurídica que resulta compleja para los alumnos de este Grado, puesto que, al ser un título multidisciplinar, ofrece una formación en muchas áreas dispares y, por consiguiente, su formación no es exclusivamente jurídica.

La mayoría de los casos versan sobre derechos fundamentales, que representan el núcleo más importante de la asignatura, y cuyo contenido es esencialmente jurisprudencial, porque la doctrina constitucional es decisiva para delimitar el alcance de los derechos y libertades públicas. Es, por ello, que las prácticas que aquí se reúnen son casos verídicos elaborados a partir de sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional. En cada caso práctico se expone resumidamente la problemática planteada y se proporciona un listado de preguntas a las que se debe dar respuesta y que sirven de orientación al estudiante para trabajar el caso práctico.

La publicación de esta recopilación de casos da cumplimiento al compromiso que se asumió con el proyecto de innovación y mejora docente que llevaba por título el mismo que este trabajo recopilatorio *Criminología y Derechos Fundamentales: su estudio mediante casos prácticos elaborados a partir de sentencias del Tribunal Constitucional*, que fue presentado en la convocatoria abierta por la Unidad de Innovación Docente del Vicerrectorado de Docencia y Formación de la Universidad de Cádiz para el curso 2014/2015.

CASO NÚMERO 1

EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD PERSONAL Y A LA SEGURIDAD: EL HABEAS CORPUS

EXPOSICIÓN

El 2 de mayo de 2007, el Director del Hospital Universitario de Granada, perteneciente al SAS, decidió el internamiento involuntario por vía de urgencia de F.J.G.F. que presentaba un diagnóstico de trastorno bipolar, comunicándolo al Juzgado de Primera Instancia número 16. El Juzgado, recibida la comunicación el 3 de mayo, dicta providencia de incoación de procedimiento de internamiento el día 4 de mayo de 2007, decretando que se procediera al examen de la persona internada y se designara al médico forense adscrito al Juzgado, para que emitiera el preceptivo dictamen facultativo sobre la procedencia del internamiento. El 9 de mayo de 2007 se practica el examen judicial y pericial del interno, levantándose acta de examen judicial por el Sr. Magistrado Juez, donde se recoge el contenido de la entrevista con el internado, en la que se anota que fue traído a la fuerza. También se levanta con la misma fecha acta de peritación del médico forense, donde el facultativo designado indica, tras el examen del recurrente, el siguiente diagnóstico: “T. bipolar. Refiere que lo trajo la ambulancia del SDS desde Almuñécar el 2 de mayo de 2007. Dice que tiene problemas familiares y que le pidió la separación a su mujer”.

Posteriormente, el Director del Hospital dirige una comunicación al Juzgado, informando que el paciente ha sido dado de alta el 16 de mayo, puesto que las causas que recomendaban su hospitalización habían cesado. Finalmente, el día 21 de mayo se dicta Auto ratificando el internamiento del recurrente en la Unidad de Salud Mental del Hospital. Contra dicho auto el recurrente promovió recurso de apelación, que es desestimado por la Audiencia Provincial de Granada el 1 de abril de 2009. Finalmente, el Sr. F.J.G.F. promueve recurso de amparo contra ambos autos.

PROPUESTA DE TRABAJO

Conteste a las siguientes preguntas con ayuda de la STC 141/2012, de 2 de julio:

1. ¿Qué tipo de recurso se interpuso?, ¿ante quién?, ¿por quién?, ¿contra qué?

2. ¿Qué derechos se estiman vulnerados en la demanda? y ¿por qué?
3. ¿Qué decisión adopta finalmente el Tribunal Constitucional en su fallo?, ¿qué argumentos utiliza para llegar a tal conclusión?
4. ¿Qué medida requiere nuestro ordenamiento para proceder al internamiento involuntario de un presunto incapaz?, ¿por qué debe intervenir si es un proceso cuya naturaleza no es penal?
5. ¿Tiene el juez un límite temporal para resolver?, ¿cuándo debería haber dictado el auto resolutorio?, ¿es aplicable en este caso el art. 17.2 CE?, ¿cómo debería haber actuado el Juzgado de Primera Instancia si deseaba mantener el internamiento?
6. ¿Se puede acudir al procedimiento de habeas corpus en un internamiento involuntario civil?
7. ¿Qué efectos tiene la STC 141/2012? Esta sentencia ha tenido una gran trascendencia, ¿por qué cree que la ha tenido?
8. ¿Por qué se resolvió el recurso por el TC, si el demandante presentó una solicitud de desistimiento, pidiendo el archivo del recurso?
9. ¿Qué condiciones debe cumplir la legalidad del internamiento de un enajenado según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
10. ¿Por qué cree que la STC 132/2010 declararía inconstitucional los incisos del art. 763.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se ha marcado en cursiva más abajo en esta práctica? (consúltela)
11. ¿Qué requerimiento hace el TC en esta sentencia al legislador orgánico?
12. ¿Por qué cree que esta sentencia no revela el nombre y apellidos del recurrente?

CASO NÚMERO 2

EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD PERSONAL: LA DETENCIÓN PREVENTIVA

EXPOSICIÓN

Susana Patricia H. P. fue detenida el 7 de agosto de 2010 por agentes de la Guardia Civil por presuntos delitos de hurtos y uso de identidad falsa, por su participación en diversas sustracciones a bañistas que se venían produciendo en la playa de Matalascañas y por proporcionar su datos personales alterados cuando se le solicitó su identificación por los agentes actuantes. Al tener conocimiento de que su detención se prolongaría hasta el lunes 9 de agosto, la recurrente sobre las 22.40 procedió a solicitar que se incoara el procedimiento de *Habeas Corpus*, petición que se comunicó al Juez de Instrucción en funciones de guardia, quien ordenó que la detenida permaneciera en las dependencias de la Guardia Civil, emplazándola para comparecer el 8 de agosto sobre las 10.00. Una vez en presencia judicial, la Magistrada, le notificó un auto por el que se denegó su solicitud de *Habeas Corpus* por considerarse improcedente. Finalmente, la recurrente fue puesta a disposición judicial para ser oída en declaración en la mañana del lunes 9 de agosto, sobre las 10.00, tal como estaba previsto desde un principio.

PROPUESTA DE TRABAJO

Conteste a las siguientes preguntas con ayuda de la STC 95/2012, de 7 de mayo:

1. ¿Qué tipo de recurso se interpuso?, ¿ante quién?, ¿por quién?, ¿contra qué?
2. ¿Qué derechos se estiman vulnerados en la demanda? y ¿por qué?
3. ¿Qué decisión adopta finalmente el Tribunal Constitucional en su fallo?, ¿qué argumentos utiliza para llegar a tal conclusión?
4. ¿Tiene el juez un límite temporal máximo de detención?, ¿cuándo se puede considerar ilegal una detención preventiva por razón de su duración?

5. Los protocolos existentes entre los Juzgados y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el traslado de los detenidos ¿pueden justificar el alargamiento del período de detención?
6. ¿Fue informada la recurrente de sus derechos con ocasión de la detención?
7. ¿Es posible negarse a prestar declaración en dependencias policiales?; ¿qué ocurriría si declarara sin estar presente el abogado?
8. ¿Cómo es concebida la libertad personal en nuestra Constitución?
9. ¿Qué es el *Habeas Corpus*?, ¿cuál es la finalidad de esta garantía específica de la libertad?
10. ¿Cómo se da curso a la petición de *Habeas Corpus* cuando la formula el afectado?, ¿para qué sirve el procedimiento de *Habeas Corpus*?
11. ¿Qué dictó el órgano judicial: un auto de inadmisión o un auto de desestimación?
12. Si para acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional se debe agotar la vía judicial previa, ¿por qué no se recurrió esta decisión ante un órgano judicial superior?
13. ¿Qué efectos prácticos tuvo la sentencia?

CASO NÚMERO 3

EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD PERSONAL: LA PRISIÓN PROVISIONAL

EXPOSICIÓN

El Juzgado Central de Instrucción, por Auto de 7 de julio de 2003, acordó la prisión provisional del Don José Orlando B. H., con orden de busca y captura internacional, en causa por delito contra la salud pública. El Sr. Botero fue detenido en Pereira (Colombia) el 7 de agosto de 2004 y una vez verificada la extradición a España, por Auto de 20 de mayo de 2005 se confirmó la situación de prisión provisional. Transcurrido un año y medio en situación de prisión provisional, solicitó su libertad alegando una enfermedad de columna y su permanencia en prisión desde el 7 de agosto de 2004. La Audiencia Nacional, por Auto de 28 de febrero de 2006, denegó su libertad, argumentando la existencia de riesgo de fuga. Mediante escrito, de 8 de agosto de 2006, solicitó nuevamente su libertad, alegando que no existía riesgo de fuga, porque su mujer e hijo menor residían en territorio español, así como otros familiares, y que había cumplido el tiempo máximo de cumplimiento de la prisión provisional. La solicitud fue rechazada por Auto de 11 de agosto de 2006, que acordó mantener la situación de prisión provisional. El demandante interpuso recurso de súplica contra dicho Auto, insistiendo en la insuficiencia de la motivación, poniendo de manifiesto que no existía riesgo de fuga, ni de reiteración delictiva, careciendo de antecedentes penales. Igualmente, con invocación del art. 17.4 CE, señaló que la situación de prisión excede de los límites estipulados legalmente en el art. 504 LECr. por no haber sido acordada su prórroga antes del vencimiento del plazo ordinario. El recurso fue desestimado por Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 31 de agosto de 2006, que fue a su vez impugnado mediante un recurso de amparo. Finalmente, fue condenado, el 28 de noviembre de 2006, a la pena de once años y tres meses de prisión y multa de cinco millones de euros, como autor de un delito continuado contra la salud pública.

PROPUESTA DE TRABAJO

Conteste a las siguientes preguntas, previa lectura de la STC 122/2009, de 7 de mayo:

1. ¿Qué tipo de recurso se interpuso?, ¿ante quién?, ¿por quién?, ¿contra qué?, ¿quién lo resuelve?

2. ¿Qué derechos fundamentales se estiman vulnerados en la demanda? y ¿por qué?
3. ¿Qué decisión adopta finalmente el Tribunal Constitucional en su fallo?, ¿qué argumentos utiliza para llegar a tal conclusión?
4. ¿Cómo se define la prisión provisional en la sentencia?, ¿mediante que tipo de decisión judicial se decreta la prisión provisional?
5. ¿Existe un plazo máximo para esta situación de privación de libertad?; ¿Qué finalidad reviste la exigencia constitucional de sometimiento de la prisión provisional a un plazo máximo?
6. ¿Los problemas de motivación en las resoluciones que acuerdan medidas limitativas de derechos fundamentales conciernen directamente a la lesión del propio derecho fundamental sustantivo o al derecho a la tutela judicial efectiva?
7. ¿Qué circunstancias deben ser ponderadas para decretar la prisión provisional si hay riesgo de fuga?
8. ¿Cuándo debe adoptarse la prórroga de la prisión provisional?
9. En relación a la adopción o mantenimiento de la prisión provisional, ¿cuál es la esfera de control reservada a la jurisdicción ordinaria y cuál corresponde al Tribunal Constitucional?
10. ¿Los autos referidos a la situación personal del imputado poseen la eficacia de cosa juzgada?
11. ¿Se acordó la retroacción de actuaciones para que el órgano judicial se pronunciara sobre la petición de libertad del recurrente?
12. ¿Qué significa ser extraditado?, ¿quién solicitó la extradición de José Orlando Botero?
13. ¿Era computable el tiempo que había permanecido preso en Colombia por el procedimiento de extradición?
14. ¿Fue finalmente condenado?, ¿a qué pena?

CASO NÚMERO 4

LA PRISIÓN PROVISIONAL Y LA EXTRADICIÓN

EXPOSICIÓN

Gonzalo Alfonso C. F. fue detenido preventivamente, con fecha 27 de octubre de 1999, en virtud de una orden internacional de detención interesada por Estados Unidos, por motivo de la supuesta comisión en dicho país de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y lesiones. La detención fue elevada a prisión provisional, si bien el 7 de abril de 2000 fue puesto en libertad. El Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional decretó de nuevo su ingreso en prisión provisional el 22 de mayo de 2002, así como auto de procesamiento, con fecha 29 de mayo de 2002, en el que se ordenaba que permaneciera en un centro privado de atención psiquiátrica para enfermos mentales crónicos de Valencia en calidad de preso hasta que su evolución permitiera su traslado a un hospital psiquiátrico. Por Auto de 31 de mayo el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional decretó el ingreso efectivo en prisión, acordándose su traslado, en calidad de preso, al Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante. Contra los Autos del Juzgado de 29 y 31 de mayo, confirmados en reforma de 2 de julio de 2002, se interpusieron los correspondientes recursos de apelación, que fueron desestimados por Autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 3 de diciembre, de 2002. Contra estos autos se interpuso recurso ante el Tribunal Constitucional.

Con fecha de 11 de junio de 2002, el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional dictó un Auto en el que se acordaba el mantenimiento de la situación de prisión provisional comunicada e incondicional. Presentados recursos de reforma y de apelación frente a la anterior resolución fueron sucesivamente desestimados por Auto de ese mismo Juzgado de 21 de junio de 2002 y por Auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 21 de octubre de 2002. Contra este último auto, confirmatorio de los Autos del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, de 11 y 21 de junio, se interpuso recurso ante el Tribunal Constitucional.

PROPUESTA DE TRABAJO

Conteste a las siguientes preguntas, previa lectura de la STC 191/2004, de 2 de noviembre:

1. ¿Qué recursos se interpusieron ante el Tribunal Constitucional?, ¿por quién?, ¿contra qué?, ¿quién los resolvió?, ¿qué significa acumulación de recursos?
2. ¿Qué derechos fundamentales se estiman vulnerados en las demandas? y ¿por qué?
3. ¿Qué decisión adopta finalmente el Tribunal Constitucional en su fallo?, ¿qué argumentos utiliza para llegar a tal conclusión?
4. ¿Cómo se define la prisión provisional en la sentencia?, ¿mediante que tipo de decisión judicial se decreta la prisión provisional?, ¿por qué?, ¿qué significa prisión provisional comunicada e incondicional?
5. ¿Cuáles son los supuestos que legitiman a decretar y mantener la prisión provisional?, ¿cuáles fueron los presupuestos alegados en el caso práctico por la Audiencia Nacional?, ¿concurrieron alguna de la finalidades constitucionalmente justificantes de la prisión provisional en este caso a juicio del Tribunal Constitucional?
6. ¿Es la alarma social un criterio válido a los efectos de apreciar la necesidad de la prisión provisional?
7. ¿Cuál es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el control judicial de la prisión provisional que se cita en la STC 191/2004?
8. ¿Qué circunstancias deben ser ponderadas para decretar la prisión provisional si hay riesgo de fuga?
9. ¿Qué significa ser extraditado?, ¿por qué se inició el procedimiento de extradición del Sr. Cabero?, ¿fue finalmente concedida?
10. ¿Era imputable el Sr. C. F., ¿por qué?, ¿qué decisión debe adoptarse si se comprueba la inimputabilidad penal?, ¿por qué no se adoptó en este caso?, ¿qué se requiere para decretar el internamiento de los enfermos mentales peligrosos para la seguridad ciudadana?

CASO NÚMERO 5

EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

EXPOSICIÓN

Argimiro S. F. fue detenido por su implicación en la muerte de su vecino que falleció como consecuencia de las heridas que supuestamente le asestó con arma blanca a raíz de una discusión. El 19 de marzo de 2007 prestó declaración ante la policía, previa información de sus derechos y asistido de Letrado. Al día siguiente, la declaración fue leída ante el Juez de Instrucción y el demandante se reafirmó y ratificó, reconociendo su firma. La Audiencia Provincial de Oviedo, en causa juzgada ante Tribunal de Jurado, condenó al demandante como autor de un delito de asesinato a la pena de diecisiete años de prisión el 2 de marzo de 2009. El demandante interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que fue desestimado mediante sentencia de 21 de julio de 2009. Interpuesto recurso de casación, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó la sentencia de 7 de julio de 2010, que lo estimó parcialmente, al considerar los hechos constitutivos de un delito de homicidio, imponiendo al acusado la pena de trece años de prisión. Finalmente, el Sr. Sarmiento interpuso recurso contra las resoluciones judiciales condenatorias citadas ante el Tribunal Constitucional, que fue resuelto mediante la STC 151/2013.

PROPUESTA DE TRABAJO:

Conteste a las siguientes preguntas, previa lectura de la STC 151/2013, de 9 de septiembre:

1. ¿Qué tipo de recurso se interpuso?, ¿ante quién?, ¿por quién?, ¿contra qué?, ¿quién resuelve este recurso?
2. ¿Qué derechos se estiman vulnerados en la demanda? y ¿por qué?
3. ¿Cómo justifica el demandante la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo interpuesto?, ¿por qué es necesario que revista tal trascendencia?
4. ¿Qué decisión adopta finalmente el Tribunal Constitucional en su fallo?, ¿cuál es el razonamiento que efectúa para sostener su pronunciamiento?

5. ¿En qué consiste el derecho fundamental a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE)?
6. ¿Qué pruebas sustentaron la autoría de los hechos según la Audiencia Provincial?
7. ¿Qué garantizan los derechos a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a que las declaraciones se presten con asistencia letrada?
8. ¿Se puede atribuir valor probatorio a la confesión efectuada por el acusado en fase de instrucción o sumarial?, ¿aún siendo una declaración autoincriminatoria?, ¿por qué?
9. ¿Las diligencias sumariales constituyen en sí mismas pruebas de cargo?
10. ¿Qué es la prueba preconstituida?
11. ¿Qué es el Tribunal del Jurado?
12. ¿Accedió el Tribunal Constitucional a suspender la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo solicitada por el recurrente?
13. ¿Es la jurisprudencia interpretativa del Tribunal Supremo vinculante?

CASO NÚMERO 6

EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

EXPOSICIÓN

Don José Luis S. fue condenado por sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, de 29 de septiembre de 2000, como autor de un delito de robo con intimidación y uso de armas cometido en establecimiento abierto al público, con el agravante de reincidencia, a la pena de cinco años de prisión y accesorias legales, así como el pago de las costas procesales y de una indemnización a la entidad Caja Postal Argentaria de 793.000 pesetas (4.766 euros).

Dicha sentencia consideró probado que el acusado entró en una entidad bancaria tapándose la cara con una bufanda y provisto de un cuchillo, que colocó en el costado de una cliente que se encontraba cerca de la caja, exigiendo a una de las empleadas que le entregara el dinero que tuviera. De este modo, consiguió 793.000 pesetas, huyendo posteriormente del lugar tras obligar al cliente a la que amedrentaba con el cuchillo a acompañarle hasta la puerta.

El demandante fue detenido unos minutos después del robo en las cercanías de la sucursal bancaria por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía titulares de los carnés profesionales núms. 19.245 y 18.295, quienes observaron como éste, al percatarse de la presencia judicial, arrojó un objeto metálico al interior de la alcantarilla. Sin embargo, estas declaraciones de los agentes se realizaron sin la presencia del abogado del acusado y no pudieron ser corroboradas en el acto del juicio oral por el fallecimiento de ambos agentes.

Pese a que el demandante de amparo no fue identificado en las ruedas de reconocimiento llevadas a cabo en fase de instrucción, ni en el acto de juicio, la autoría se considera probada sobre la base de una prueba dactiloscópica, que acredita el hallazgo de huellas dactilares frescas y nítidas correspondientes al dedo índice de la mano derecha del acusado en la segunda puerta de acceso al banco.

El acusado negó desde un primer momento los hechos que se le imputaban, alegando que había estado en la sucursal minutos antes del robo para cambiar moneda, si bien, no había entrado porque había encontrado a un amigo en la puerta a quien acompañó a tomar café. Sin embargo, la Audiencia condenó al sujeto al entender que su declaración no se corroboraba por la presencia a

declarar de ningún testigo, especialmente, del amigo al que se encontró en la puerta de la sucursal bancaria. La cliente a la cual amenazó declaró como testigo, afirmando que al sujeto que perpetró el delito lo esperaba un cómplice en la puerta de la sucursal bancaria.

El acusado interpuso un recurso de casación contra la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial, que fue inadmitido a trámite por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuyo auto de inadmisión, de 18 de julio de 2001, también recurrió.

PROPUESTA DE TRABAJO

Conteste a las siguientes preguntas con ayuda de la STC 135/2003, de 30 de junio:

1. ¿Sobre qué recurso conoce la sentencia?, ¿ante quién se interpone?, ¿quién lo interpone?, ¿contra qué?
2. ¿Qué derechos se denuncian vulnerados en la demanda interpuesta?, ¿por qué?, ¿el condenado puede acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional?
3. Como regla general, ¿cuándo considera el Tribunal Constitucional que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en un proceso penal?, ¿puede el Alto Tribunal valorar la actividad probatoria del juez a quo conforme a criterios de calidad u oportunidad?
4. ¿Existía prueba directa de cargo de la autoría del robo por D. José Luis S., ¿se vulnera, por ello, el derecho a la presunción de inocencia del sujeto?
5. Con respecto a la presencia de huellas dactilares del sujeto en la puerta del banco:
 - a) ¿Qué características debe reunir la prueba indiciaria para poder considerarse prueba de cargo suficiente para hacer decaer la presunción de inocencia?
 - b) La prueba dactiloscópica, ¿prueba la autoría del sujeto?, ¿es suficiente como base de la condena del sujeto?

6. Con respecto a las declaraciones de los agentes de la Policía (para consultar a las siguientes preguntas debe consultar la doctrina constitucional recogida en STC 187/2003, FJ 3º):
 - a) ¿Se consideran las diligencias sumariales pruebas que vinculan a los órganos de justicia penal en el momento de dictar sentencia?
 - b) La imposibilidad de corroborar las declaraciones de los agentes, ¿supone, por tanto, la ilegitimidad de utilizar las mismas como prueba?
7. ¿Debe el sujeto probar su testimonio?, ¿le puede exigir la Audiencia la aportación del testigo exculpatario
8. ¿Considera adecuada la sentencia condenatoria?, ¿se ha respetado en este caso la presunción de inocencia del Sr. José Luis S?

CASO NÚMERO 7

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y PRUEBA INDICIARIA

EXPOSICIÓN

S. Ch. fue condenado por el Juzgado de lo Penal, el 14 de febrero de 2002, como autor de un delito intentado de robo con fuerza en las cosas, a la pena de cuatro meses de prisión, al considerar acreditado que, en compañía de otra persona no identificada, rompió el cristal de la puerta trasera izquierda de un vehículo, abriendo su seguro, momento en que al sonar la alarma se dio a la fuga, siendo detenido por el propietario del vehículo y su padre, al sorprenderlo junto al vehículo. Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación, que fue desestimado por la Audiencia Provincial, por lo que el recurrente acudió al Tribunal Constitucional.

PROPUESTA DE TRABAJO

Conteste a las siguientes preguntas, previa lectura de la STC 229/2006, de 17 de julio:

1. ¿Qué tipo de recurso se interpuso?, ¿ante quién?, ¿por quién?, ¿contra qué?, ¿quién lo resolvió?
2. ¿Qué derecho fundamental se estima vulnerado por el recurrente?, ¿quién entiende que ha lesionado dicho derecho?, y ¿por qué?
3. ¿Qué posicionamiento adoptó el Ministerio Fiscal?
4. ¿Qué decisión adopta finalmente el Tribunal Constitucional en su fallo?, ¿qué argumentos utiliza para fundar su decisión?
5. ¿Cómo fue agotada la vía judicial previa?
6. ¿Es legal la detención efectuada por particulares que no son agentes de seguridad?
7. ¿Es constitucional dictar sentencia condenatoria sin la existencia de prueba directa de cargo?, ¿qué requisitos deben concurrir para que la prueba indiciaria tenga entidad suficiente para enervar la presunción de inocencia?

8. ¿Qué debe valorar el Tribunal Constitucional cuando se alega la vulneración del derecho a la presunción de inocencia?, ¿puede valorar la actividad probatoria?
9. ¿Qué elementos se utilizaron para desvirtuar la presunción de inocencia?

CASO NÚMERO 8

EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

EXPOSICIÓN

El 3 de junio de 1998 llegaron al aeropuerto de Barcelona tres paquetes postales procedentes de Venezuela, respecto de los cuales la policía española había sido alertada de que podían contener sustancias estupefacientes. En el curso de esta investigación, en la que se confirma que los paquetes contenían cocaína, se producen dos detenciones. Posteriormente es detenido José Luis P. M. ante las manifestaciones de uno de los detenidos que le identifica como la persona que dirigía la operación de introducción de la cocaína en España para su posterior distribución a terceros. En el momento de su detención, se le intervienen, junto a otros efectos personales, unas hojas manuscritas y dobladas en el interior de una agenda que portaba, que la Guardia Civil lee e incorpora a la causa. Se trataba de una carta escrita desde la cárcel por la persona que le identificó, comprometiéndose a manifestar que D. José Luis P. no tenía nada que ver con la recepción del paquete, ni sabía nada de la cocaína y solicitando que disculpara su actitud, que no era un chivato y no iba a traicionar a nadie. Durante la celebración del juicio no se le permitió a la defensa de Sr. P. preguntar al coimputado que lo delató, si había recibido mejor trato por la policía por implicarle, al estimarse la pregunta impertinente la pregunta por el órgano judicial.

El recurrente fue condenado por sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 21 de junio de 2000, por la que se condena como autor de un delito contra la salud pública, a la pena de nueve años de prisión, accesoria legal y multa de 42.420.000 pesetas, así como al pago de la mitad de las costas procesales. Contra la anterior resolución se interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que lo desestima mediante sentencia de 12 de mayo de 2001, por lo que el recurrente interpuso un recurso de amparo alegando la lesión de los siguientes derechos fundamentales.

- a) Derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), en relación con el derecho al secreto de las comunicaciones postales (art. 18.3 CE).
- b) Derecho a la asistencia letrada (art. 24.2 CE).
- c) Derecho a la defensa y a utilizar los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE).
- d) Derecho al doble grado de jurisdicción en materia penal (art. 14.5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
- e) Derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
- f) Derecho a la tutela judicial efectiva, por incongruencia omisiva y falta de razonamiento de las resoluciones judiciales (art. 24.1 CE).

PROPUESTA DE TRABAJO

Conteste a las siguientes preguntas con ayuda de la STC 70/2002, de 3 de abril:

1. ¿Qué recurso es resuelto por la STC 70/2002?, ¿quién lo interpuso?, ¿qué actos fueron impugnados?
2. ¿Por qué el recurrente alega vulnerados en la demanda interpuesta los derechos arriba relacionados?
3. ¿Qué criterios marca la doctrina constitucional para precisar el orden en el que se ha de examinar las quejas del demandante de amparo?
4. Según el Tribunal Constitucional, ¿la falta de asistencia letrada en la declaración policial es invalidante de la misma en todo caso?
5. ¿La alegación relativa al derecho de defensa tiene fundamento a juicio del Tribunal Constitucional?
6. ¿Entiende el Tribunal Constitucional vulnerado el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes?; ¿esta garantía reconocida en el art. 24.2 CE atribuye al procesado el derecho a que se admitan todos los medios de prueba propuestos?; ¿debía el recurrente probar el carácter decisivo de la pregunta formulada para la decisión final del proceso y, por tanto, que su inadmisión fue generadora de indefensión?
7. ¿El sistema casacional español respetuoso con el derecho a la doble instancia penal garantizado en el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos¹?
8. ¿Considera nuestro Alto Tribunal fundada la queja respecto de la presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva?; ¿qué se entiende por resolución congruente desde la perspectiva de este derecho?
9. ¿Se vulneró el derecho al secreto de las comunicaciones postales al ser carta intervenida sin previa autorización judicial?, por consiguiente, ¿la carta como prueba de cargo era ilícita?
10. ¿Existió suficiente actividad probatoria de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia?

¹ “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.

CASO NÚMERO 9

PROHIBICIÓN DE TORTURA, TRATOS INHUMANOS Y DEGRADANTES EX ART. 15 CE

EXPOSICIÓN

Santiago Vigo Domínguez, interno del Centro Penitenciario Madrid VI, denunció que, tras haber mantenido una comunicación vis a vis con sus padres y hermano, fue objeto de malos tratos físicos y psicológicos por funcionarios del citado centro en el curso de un cacheo integral sobre las 13.00 horas del día 14 de junio de 2008. Tras protagonizar este incidente, al preso le fue impuesta una corrección disciplinaria, siendo trasladado sobre las 14.30 al módulo de aislamiento donde supuestamente continuaron los malos tratos e insultos, y en donde permaneció más de cuarenta y ocho horas. Por estos hechos, el recurrente solicitó del Juzgado la incoación de la oportuna investigación al objeto de poder depurar las responsabilidades penales a que hubiere lugar. El día 24 de junio el Juzgado de Instrucción acordó incoar diligencias previas y librar oficio al citado Centro Penitenciario a fin de que remitiera informe sobre los hechos denunciados. En el referido informe, evacuado mediante escrito del Director de 1 de julio de 2008, acompañado de los correspondientes partes médicos y de incidencias, se desmiente la versión de los hechos relatada por el recluso. Tras prestar ésta declaración el 22 de julio de 2008, en la que se ratifica en su escrito de denuncia, el Juzgado dictó Auto acordando el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa. Contra el citado Auto, Santiago Vigo interpuso recurso de reforma, denunciando la insuficiente instrucción cumplida por el órgano judicial. El Juzgado de Instrucción, por Auto de 8 de octubre de 2008, acordó desestimar el recurso de reforma interpuesto, por considerar que las diligencias practicadas no revelaban la existencia de indicios racionales de haberse perpetrado el hecho denunciado. Contra este último Auto el recurrente interpuso recurso de apelación, insistiendo en los mismos argumentos. La Audiencia Provincial de Madrid, por Auto de 27 de enero de 2009, acordó desestimar el recurso de apelación por considerar que la decisión de archivo cuestionada no merecía ningún reproche, al carecer de credibilidad la denuncia formulada. Contra las resoluciones judiciales citadas, Santiago Vido interpuso recurso mediante escrito registrado en el Tribunal Constitucional el 12 de marzo de 2009.

PROPUESTA DE TRABAJO

Conteste a las siguientes preguntas, previa lectura de la STC 40/2010, de 19 de julio:

1. ¿Qué tipo de recurso se interpuso?, ¿ante quién?, ¿por quién?, ¿contra qué?, ¿quién lo resuelve?
2. ¿Qué derechos fundamentales se estiman vulnerados por el recurrente? ; ¿qué órgano produce la lesión de esos derechos?, y ¿por qué?
3. ¿Qué decisión adopta finalmente el Tribunal Constitucional en su fallo?, ¿qué argumentos utiliza para fundar su decisión?
4. ¿Qué significa retrotraer las actuaciones?
5. ¿Qué recursos utilizó para agotar la vía judicial previa?
6. ¿Qué posicionamiento adopta el Ministerio Fiscal?
7. ¿Cuál es el objeto del derecho fundamental a no sufrir tratos inhumanos o degradantes del art. 15 CE?, ¿reviste este derecho un carácter absoluto?
8. ¿Cuál es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva de quien denuncia haber sido víctima de torturas o de tratos inhumanos o degradantes?; ¿es vinculante esta doctrina para nuestro Alto Tribunal?
9. ¿Cuál es la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a no sufrir tratos inhumanos y degradantes?; ¿es vinculante esta doctrina?

CASO NÚMERO 10

EL SECRETO DEL SUMARIO COMO LÍMITE DEL DERECHO DE INFORMACIÓN

EXPOSICIÓN

El día 19 de marzo de 1984 se produjo un incendio en un inmueble de la ciudad de Palma de Mallorca en el que pereció una persona, dándose aviso telefónico al Juzgado de Instrucción, que dictó dicho día 19 auto acordando proceder a la incoación de diligencias previas y, en primer lugar, a la inspección ocular de los hechos. En el curso tal inspección, el Juez prohibió a un periodista la obtención de imágenes gráficas del lugar y, sabedor de que otros profesionales, autorizados por el Jefe de Bomberos, habían tomado fotografías del lugar de los hechos, así como del cadáver, acordó el mismo día 19 oficiar al Jefe Superior de Policía para que comunicara a los distintos medios de prensa de Palma que las fotografías que se hubieran realizado en el interior del apartamento siniestrado quedaban afectadas a la investigación judicial, por lo que no procedía su publicación sin permiso de la autoridad correspondiente hasta la finalización de las diligencias incoadas al efecto.

La entidad editora “Última hora”, uno de cuyos periodistas había tomado fotografías, interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación frente a dicha resolución. El día 29 de marzo de 1984 el Juez de Instrucción dictó un auto desestimando el recurso. Interpuesto recurso de apelación, la Audiencia Provincial dictó auto desestimatorio de 27 de abril del mismo año. Dichas resoluciones judiciales fueron finalmente impugnadas por dicha editora ante el Tribunal Constitucional.

PROPUESTA DE TRABAJO

Conteste a las siguientes preguntas, previa lectura de la STC 13/1985, de 31 de enero:

1. ¿Qué tipo de recurso se interpuso?, ¿ante quién?, ¿por quién?, ¿contra qué?, ¿quién lo resolvió?
2. ¿Qué derechos fundamentales se estimaron vulnerados por el recurrente?, ¿qué órgano produjo la lesión de esos derechos?, y ¿por qué?

3. ¿Qué argumentos fueron utilizados en las resoluciones dictadas por los órganos judiciales ordinarios?
4. ¿Qué decisión adopta finalmente el Tribunal Constitucional en su fallo?, ¿qué argumentos utiliza para fundar su decisión?
5. ¿Cómo fue agotada la vía judicial previa?
6. ¿Qué tratados internacionales son traídos a colación en la sentencia?, ¿por qué son citados?, ¿qué valor les confiere el art. 10.2 CE?
7. ¿Es el derecho fundamental a la información ilimitado?, ¿cuáles son los límites constitucionales del derecho a comunicar o recibir libremente información veraz?
8. ¿Se produjo una censura previa por parte de la autoridad judicial, al prohibir la difusión de las fotos?
9. ¿El secreto sumarial constituye un límite al derecho a la información veraz?, ¿es contrario a la garantía institucional prevista en el art. 120.1 CE)?; ¿cómo ha de ser interpretada esta institución?

CASO NÚMERO 11

RESERVA DE LEY Y REGLAMENTO: PRINCIPIO DE LEGALIDAD SANCIONADORA

EXPOSICIÓN

El Alcalde del Ayuntamiento de Gijón, mediante Resolución de 29 de octubre de 1998, impuso a Francisco Manuel Alonso una sanción de multa de 50.001 pesetas (300 euros) por la contaminación acústica causada por el Pub “Belfast”, del que era propietario. Este local sobrepasaba los niveles sonoros legalmente permitidos por la Ordenanza Municipal sobre Protección contra la Contaminación Acústica. El sancionado interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Asturias, que dictó sentencia desestimatoria el 18 de marzo de 1999, confirmando la validez de la resolución sancionadora. Contra dicha sentencia se interpuso el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional.

PROPUESTA DE TRABAJO

Resolver las siguientes preguntas, tras la lectura de la STC 16/2004, de 23 de febrero:

1. ¿Qué tipo de recurso se interpuso?, ¿ante quién?, ¿por quién?, ¿contra qué?, ¿quién lo resolvió?
2. ¿Qué argumentos fueron alegados por Francisco Manuel Alonso en el recurso que interpuso?; ¿cómo justificó la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo?
3. ¿Cuál fue el fallo del Tribunal Constitucional?, ¿por qué?
4. En el voto particular formulado en esta sentencia, ¿cuáles son las razones de discrepancia que exponen los magistrados?
5. ¿Qué es una reserva de ley?, ¿cuál es su finalidad?
6. ¿Qué significa el principio de legalidad sancionadora ex art. 25.1 CE?

7. ¿La existencia de una reserva de ley excluye la posibilidad de una remisión reglamentaria?
8. ¿Qué naturaleza normativa tienen las ordenanzas municipales?, ¿por qué se flexibiliza la reserva de ley en el ámbito sancionador en relación a estas normas?
9. ¿Puede el principio constitucional de reserva de ley aplicarse retroactivamente? Ya sea su respuesta afirmativa o negativa, ¿qué consecuencia ha tenido sobre los reglamentos preconstitucionales?; ¿pueden los órganos judiciales inaplicar las normas jurídicas preconstitucionales que contravengan la Constitución?
10. ¿Dispensa la Constitución de 1978 protección contra la contaminación acústica?
11. En el FJ 3º de la sentencia se citan varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿qué valor tiene en España la jurisprudencia de este tribunal internacional?, ¿cuál es la doctrina del TEDH sobre los derechos afectados por el ruido ambiental?

CASO NÚMERO 12

PRINCIPIO NON BIS IN IDEM Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN LAS RELACIONES DE ESPECIAL SUJECCIÓN

EXPOSICIÓN

A D. José Manuel T. F., agente de la policía municipal de Madrid, le fue impuesta la sanción de tres años de suspensión de funciones como autor de una falta disciplinaria muy grave tipificada en el art. 27.3.j) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante la resolución del cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, de 21 de octubre de 1993, confirmada en reposición por resolución de 9 de mayo de 1994. Contra dicha resolución, el agente policial sancionado interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Concluido el procedimiento, y dentro del plazo para dictar sentencia, se promovió consulta sobre la constitucionalidad del citado precepto, en la medida que él mismo podría implicar la vulneración del principio non bis in idem. Finalmente, se dictó sentencia estimatoria el 7 de julio de 2005.

PROPUESTA DE TRABAJO

Conteste a las siguientes preguntas, previa lectura de la STC 188/2005, de 7 de julio:

1. ¿Qué tipo de proceso resuelve la sentencia?, ¿por quién se plantea?, ¿contra qué?
2. ¿Qué órgano del TC dictó la STC 188/2005?, ¿es el único competente para conocer de este tipo de procesos?
3. ¿Por qué dudó el órgano judicial de la constitucionalidad del precepto legal?, ¿Cuándo se plantea la duda queda el proceso judicial a quo pendiente de sentencia?
4. ¿Qué posicionamiento adoptó la Abogacía del Estado?, ¿y el Ministerio Fiscal?
5. ¿Qué decisión adopta finalmente el Tribunal Constitucional en su fallo?, ¿qué argumentos utilizó para fundar su decisión?

6. ¿Qué principio constitucionaliza el art. 25.1 CE?
7. ¿Qué significa el principio non bis in idem?, ¿cuál es la jurisprudencia constitucional sobre el mismo?; ¿qué requisitos son requeridos para que este principio despliegue sus efectos?
8. ¿En nuestro país a quién corresponde el *ius puniendi*?
9. ¿Cuál era la finalidad perseguida por la falta muy grave cuestionada?; ¿el agravante de la reincidencia conculca el principio non bis in idem?
10. ¿Qué es un voto particular?, ¿por qué se formuló uno en la sentencia analizada?
11. ¿Cuánto tiempo se demoró el TC en la resolución del proceso?
12. ¿Qué significa que la resolución del cuarto teniente de alcalde fue confirmada en reposición?
13. Tras una lectura comprensiva de la Sentencia, ¿podría explicar qué es una “*relación de sujeción especial*” desde la óptica del Derecho Administrativo?
14. El Ordenamiento jurídico establece que [...] *Las Administraciones Públicas deben corregir disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos [...]*, una potestad que deberá ejercerse de acuerdo a diferentes principios: ¿a qué principios nos referimos?
15. Una vez considerado el Fallo del Tribunal Constitucional, reflexione sobre la normativa vigente en materia disciplinaria relativa a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
16. ¿Cómo clasifica el legislador con carácter general las faltas disciplinarias (de su personal)?, y específicamente en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ¿ha seguido el mismo esquema?
17. ¿Es lo mismo la prescripción de las infracciones que la prescripción de las sanciones?
18. ¿El procedimiento disciplinario es un procedimiento administrativo? Razone la respuesta.

CASO NÚMERO 13

EL DERECHO FUNDAMENTAL DE REUNIÓN

EXPOSICIÓN

El 8 de febrero de 2008, Soledad G., en nombre de varias asociaciones de mujeres integrantes de la Plataforma 8 de marzo de Sevilla, comunicó por escrito a la Subdelegación de Gobierno de Sevilla la celebración de una manifestación para el siguiente día 8 de marzo con motivo de la conmemoración del día internacional de la mujer. Mediante resolución de 15 de febrero de 2008 la Junta Electoral Provincial de Sevilla acordó proponer a las asociaciones convocantes la modificación de la fecha prevista para la celebración de la manifestación, al advertir que el acto convocado coincidía con la jornada de reflexión previa a las elecciones generales y autonómicas, convocadas para el día siguiente 9 de marzo de 2008, por lo que alertaba sobre el riesgo de que la marcha pudiera afectar a la tranquilidad y sosiegos deseables en el día anterior al ejercicio del derecho al sufragio activo. Contra dicha resolución, la plataforma interpuso recurso contencioso-administrativo, que fue desestimado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía mediante Sentencia de 25 de febrero de 2008. Por todo ello, la plataforma recurrente impugnó la resolución de la Junta Electoral y la posterior Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que confirmó su legalidad ante el Tribunal Constitucional, que dictó la sentencia estimatoria 96/2010.

PROPUESTA DE TRABAJO

Conteste a las siguientes preguntas, previa lectura de la STC 96/2010, de 15 de noviembre:

1. ¿Qué tipo de recurso se interpuso?, ¿ante quién?, ¿por quién?, ¿contra qué?, ¿quién lo resolvió?
2. ¿Qué derecho fundamental se estima vulnerado por el recurrente?, ¿quién entiende que ha lesionado dicho derecho?, y ¿por qué?
3. ¿Qué posición adopta el Abogado del Estado, tras personarse en el procedimiento?
4. ¿Qué solicitó el Ministerio Fiscal también personado en el procedimiento?

5. ¿Qué decisión adopta finalmente el Tribunal Constitucional en su fallo?, ¿qué argumentos utiliza para tomar tal decisión?
6. ¿Cómo fue agotada la vía judicial previa?
7. ¿Era la demanda de amparo de especial trascendencia constitucional?, ¿qué ocurre si no se cumple la carga de justificar tal trascendencia?
8. ¿Es el derecho fundamental de reunión un derecho absoluto?, ¿pueden incidir en él los poderes públicos?
9. ¿Se requiere autorización previa de la autoridad gubernativa para celebrar una manifestación?
10. ¿Pueden celebrarse manifestaciones en la jornada de reflexión electoral?; ¿La manifestación incidía en la necesaria neutralidad que debe caracterizar la jornada de reflexión?
11. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho de sufragio activo y el derecho de sufragio pasivo?
12. ¿Qué alcance práctico alcanza el fallo finalmente adoptado en la STC 96/2010?

CASO NÚMERO 14

DERECHOS DEL TRABAJADOR A LA INTIMIDAD Y AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES VERSUS PODER DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL

EXPOSICIÓN

El 17 de octubre de 2008, la empresa Alcaliber notificó carta de despido disciplinario al trabajador Alberto P. G., quien había trabajado allí desde el 1 de junio de 1976. Dicha empresa se dedicaba a la actividad químico industrial de obtención de alcaloides (morfina, codeínas) consistiendo la misma en el cultivo de la planta adormidera y posterior tratamiento de la cosecha en sus instalaciones industriales. El motivo del despido fue la transgresión de la buena fe, al haber proporcionado indebidamente información confidencial de la empresa a personal de otra entidad mercantil, sin haber pedido nunca autorización para ello y utilizando en dicha transmisión medios que eran propiedad de la empresa –en concreto, teléfono móvil y correo electrónico-. Previamente, con fecha 17 de junio de 2008, y a requerimiento de la empresa se había personado en su sede un notario, al que, por un lado, se pone a su disposición un teléfono móvil propiedad de la empresa, comprobándose el contenido de los mensajes SMS, y por otro, se le entrega en depósito un ordenador portátil, también propiedad de la empresa; se procede después en la notaría, en su presencia y por parte de un técnico, a identificar el disco duro y a efectuar una copia del mismo, sin posibilidad de modificación de datos.

El trabajador presentó demanda de despido, solicitando la declaración de improcedencia. Por Sentencia de 15 de julio de 2009, el Juzgado de lo Social estimó la demanda y declaró el despido improcedente, si bien desestimó la petición de nulidad de la prueba pericial aportada por la empresa en relación con los correos electrónicos, por cuanto su práctica estuvo fundada en las sospechas de un comportamiento irregular del trabajador. Frente a la sentencia anterior se interpuso recurso de suplicación por la empresa Alcaliber, que fue estimado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Sentencia de 27 de abril de 2010, declarando procedente el despido. Contra la anterior sentencia, el trabajador interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina, aportando como Sentencia contradictoria la de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2007. Dicho recurso fue inadmitido mediante Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 29 de marzo de 2011. Finalmente, se promovió un recurso por Alberto P. contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

PROPUESTA DE TRABAJO

Conteste a las siguientes preguntas, previa lectura de la STC 170/2013, de 7 de octubre:

14. ¿Qué tipo de recurso se interpuso?, ¿ante quién?, ¿por quién?, ¿contra qué?, ¿quién lo resolvió?
15. ¿Qué derechos fundamentales se estiman vulnerados por el recurrente? y ¿por qué?
16. ¿Qué posicionamiento adoptó el Ministerio Fiscal?
17. ¿Qué argumentos alegó el Juzgado de lo Social para declarar el despido improcedente?, ¿y el Tribunal Superior de Justicia para declararlo procedente?
18. ¿Qué decisión adopta finalmente el Tribunal Constitucional en su fallo?, ¿qué argumentos utiliza para fundar su decisión?
19. ¿Por qué fue despedido el recurrente?, ¿quién estima que ha lesionado el derecho fundamental?, ¿puede acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional si la vulneración del derecho fundamental se origina por la actuación de un particular?
20. ¿Era la demanda de amparo extemporánea?
21. ¿Cómo fue agotada la vía judicial previa?
22. ¿Era la resolución de este recurso *de especial trascendencia constitucional*?
23. ¿El acceso de la empresa al contenido de los correos electrónicos encuentra cobertura en el art. 20.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores?; ¿qué requisitos requiere el TC para que se pueda adoptar la medida de acceder a los correos electrónicos?;
24. ¿Pudo tenerse en cuenta la información recabada del teléfono móvil? Por consiguiente, ¿las pruebas obtenidas de los mensajes de texto del teléfono móvil proporcionado por el trabajador debían ser rechazadas por resultar contrarias a su derecho a la intimidad?
25. ¿Qué naturaleza jurídica revisten los convenios colectivos?, ¿poseen fuerza vinculante?

CASO NÚMERO 15

COLISIÓN DE DERECHOS

EXPOSICIÓN

La periodista L. G. H., contratada por la productora Canal Mundo Producciones Audiovisuales, acudió a la consulta de D.^a R. M.^a F. T., esteticista y naturista, haciéndose pasar por una paciente, por lo que fue atendida por ésta en la parte de su vivienda destinada a consulta, ocasión utilizada por la primera para grabar la voz y la imagen de la segunda por medio de una cámara oculta. Canal Mundo Producciones Audiovisuales cedió la grabación obtenida a Televisión Autonómica Valenciana, que la emitió en un programa en el que se desarrolló también una tertulia sobre la existencia de falsos profesionales que actúan en el mundo de la salud. En la tertulia los intervinientes criticaron a la esteticista, cuya imagen apareció en un ángulo de la pantalla, y pusieron de manifiesto la existencia, casi tres años antes de la grabación emitida, de una condena penal previa contra dicha persona por delito de intrusismo por haber actuado como fisioterapeuta sin ostentar título para ello.

Considerando que los comentarios expresados en dicho programa de televisión lesionaban su derecho al honor y que la captación y grabación de sus imágenes dañaban su derecho a la propia imagen y a la intimidad, D.^a R. M. F. interpuso, el 5 de febrero de 2001, ante el Juzgado de Primera Instancia demanda, reclamando una indemnización de setenta y cinco millones de pesetas. El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia desestimando la demanda el 26 de junio de 2001, al entender que la actuación desarrollada por la periodista mediante la cámara oculta se enmarca en el llamado periodismo de investigación y que las manifestaciones efectuadas en el programa televisivo revestían un ánimo puramente informativo.

Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia, que dictó, con fecha de 24 de enero de 2002, otra sentencia desestimándolo y confirmando íntegramente la sentencia recurrida. El Tribunal declara que las declaraciones vertidas por los intervinientes del programa televisivo resultan amparadas por el ejercicio de la libertad de expresión ante unos hechos veraces, y que en ningún momento se vierte manifestación alguna que pueda entenderse insultante o vejatoria contra el honor de la parte apelante. El Tribunal de apelación concluyó que el reportaje objeto de recurso reunía todos los requisitos necesarios (veracidad, objetividad, interés general y propósito especialmente informativo).

PROPUESTA DE TRABAJO

Conteste a las siguientes preguntas con ayuda de la STC 12/2012, de 30 de enero:

1. ¿Qué tipo de demandas se interpusieron?, ¿ante quién?, ¿por quién?, ¿qué impugnaron?, ¿se pueden resolver ambas por la misma sentencia?
2. ¿Qué derechos se estiman vulnerados en la demanda? y ¿por qué?
3. ¿Qué conflicto de derechos se plantea en el caso práctico?, ¿cuál de los derechos fundamentales que entran en colisión cree que debe prevalecer?
4. ¿Qué decisión adopta finalmente el Tribunal Constitucional en su fallo?, ¿qué criterios baraja para realizar el juicio de ponderación entre tales derechos?
5. ¿Se declaró vulnerado el derecho al honor?
6. ¿Cuál es la doctrina constitucional sobre el contenido de la libertad de información?
7. ¿Cuál es el contenido esencial de los derechos a la intimidad y a la propia imagen reconocidos en el art. 18.1 CE?
8. ¿Cuál es canon de enjuiciamiento del garante máximo de los derechos fundamentales sobre los eventuales conflictos entre dichos derechos?
9. ¿Por qué esta sentencia ha tenido gran trascendencia?, ¿prohíbe el uso de la cámara oculta por los periodistas en todo caso?